

ZAMARRIPA

◆ Han pervertido los instrumentos de las indagatorias. Manipulan las voces criminales y minan la credibilidad de sus acciones. Son presos de su estrategia.

TOLVANERA

Voces criminales

ROBERTO ZAMARRIPA

El país vive al ritmo de las voces criminales. Del testigo protegido (criminal anónimo) al delator público (criminal confeso). Las voces criminales, antes que la inteligencia policial, se convierten en la madre de todos los arraigos; dictan la averiguación al Ministerio Público y sentencian antes que el juez.

Más que la inteligencia es indecencia; más que pesquisas hay malicias; más que investigaciones pesan las delaciones.

Dos testigos protegidos, ex integrantes de la denominada "Familia", han detallado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008 las líneas de conexión entre delincuentes y políticos. Sus dichos han sido fundamentales para llevar a la cárcel a ocho ediles y 22 funcionarios michoacanos y colocar a la entidad en un problema de gobernabilidad.

Las voces criminales, sustento de las persecuciones policiacas, han resultado más dañinas para las instituciones del Estado que para los grupos delictivos. A las primeras les ha despojado de funcionarios federales, de gobernantes municipales y funcionarios estatales; a los segundos no los ha descabezado. Dicho de otra forma: en Michoacán han sido detenidos 30 funcionarios públicos, ocho de ellos electos en urnas, y del otro lado sólo *La Minsa* con una secuela de terror.

El gobierno federal es preso de su propia estrategia, donde no separa fines de medios ni castigadores de víctimas. Por un lado rechaza públicamente la negociación con criminales pero por otro fundamenta sus redadas con los pactos secretos con varios de ellos, a los que da protección y paga para fincar sus declaraciones ministeriales anónimas e inculpativas.

El recurso entra en la zona de des-

gaste, de falta de credibilidad, de dudas y sospechas.

Las voces criminales eran anónimas y aliadas del Estado. Con la aparición de *La Tuta* cayó el paradigma. El desplante telefónico del presunto jefe de "La Familia" generó un doble efecto cuyo saldo es más dañino que benigno. Legitimó la lucha del gobierno porque su voz, por fin, dio forma a un enemigo que era invisible. La lucha contra el crimen ya tiene rivales.

Pero si *La Tuta*, con su voz pública, legitimó la batalla gubernamental, la respuesta inmediata del gobierno federal a ese mensaje legitimó a su vez al propio grupo criminal.

La Tuta pedía interlocución y la tuvo a una velocidad récord, más rápido que contestar la llamada de un gobernador a Los Pinos.

La Tuta habló de manera pública. Ninguno de los dicentes anónimos que han llevado a la cárcel a los funcionarios michoacanos y a otros tantos, incluso federales, tiene una jerarquía mayor a *La Tuta*, pero sus revelaciones han valido oro para los juzgadores. ¿Qué hubiera sucedido si los dichos de *La Tuta* en lugar de exponerlos en la televisión michoacana los dice como testigo protegido ante la SIEDO? ¿Indagarían sus revelaciones? Porque, por ejemplo, las acusaciones lanzadas contra el secretario de Seguridad Pública fueron severas.

¿Cuándo sí es creíble la voz criminal?

La presentación de los secuestradores pertenecientes a la banda de "Los Petriciolet" es una extensión de una política de manipulación de las voces criminales. Antes que ofrecer la colaboración a la autoridad local, la Secretaría de Seguridad Pública federal lanzó a su detenido a descalificar



Fecha 20.07.2009	Sección Primera	Página 17
----------------------------	---------------------------	---------------------

una investigación de otra dependencia y defender a una agente policiaca implicada en una banda de plagiarios. Quien coordinaba esa conferencia era nada menos que el jefe de la policía implicada en el secuestro del joven Fernando Martí.

“La que tienen detenida no es la persona que participa en el secuestro... sus características físicas no coinciden con esa persona que yo veo”, dijo *espontáneamente* Noé Soto, el asesino de 31 años.

La voz criminal que sentencia antes de comparecer ante el MP o dejarle al juez la resolución final.

Es el síndrome del Partido Verde. Contratar a un mercenario, Raúl Araiza, para pedir votos por la pena de muerte porque el político no tiene la cara ni la credibilidad para decirlo. Aquí se contrata un criminal; para salvar a *La Lore!* porque sus jefes no tienen la cara ni la credibilidad para decirlo.

La manipulación de las voces criminales ya tocó límite y pegó a la credibilidad de una batalla que lo que menos requiere es de simulaciones.

Correo electrónico: tolvanera06@yahoo.com.mx